



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Informe Firma Conjunta Transferible

Número:

Referencia: 35.503-I, COOPERATIVA DE TRABAJO PERFIL LTDA., SENTENCIA

En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expte. 35.503-I, caratulado **“COOPERATIVA DE TRABAJO PERFIL LTDA. s/ recurso de apelación”**:

El Dr. Luis dijo:

I. Que a fs. 28/38vta. se interpuso recurso de apelación contra la Res. 265/2011 que determinó de oficio el impuesto al valor agregado (en adelante IVA) de los períodos fiscales 12/2004 a 05/2010, intimó su pago con más intereses resarcitorios y aplicó una multa equivalente al 50% del impuesto omitido (cfme. art. 45, ley 11.683).

II. Que la recurrente refirió que el 20/08/2004 presentó ante la AFIP una multinota solicitando la exención en el IVA, conforme lo establecido por el art. 7, inc. “h”, pto. 19 de la ley 23.349. Asimismo, afirmó haber presentado el formulario F460/J mediante el cual se inscribió e informó al fisco su calidad de IVA exento, desde el 01/08/2004.

Destacó que a partir de ese momento figuró como “exento” en el sistema de la AFIP, por lo que entendió que necesariamente un empleado del organismo debió analizar la solicitud, su fundamento legal y cargar la información en el sistema con la condición de IVA “exento”, sin que hubiese mediado observación, ni oposición alguna. Agregó que recién 6 años después, se inició un proceso de fiscalización que culminó con el dictado de la resolución que aquí recurre.

Consideró en todo momento que la prestación de servicios por parte de sus asociados se encontraba exenta del gravamen. En efecto, a la fecha de su categorización, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria sostenían que las cooperativas se encontraban exentas de la obligación de tributar el IVA.

Señaló que al tomar conocimiento de la sentencia de la CSJN en “Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda.”, del 16/02/2010, contraria a su tesitura, se inscribió en el impuesto, y comenzó a cobrar y liquidar el gravamen correspondiente a partir de 06/2010, lo que demuestra la buena fe en su obrar.

Manifestó que tratándose de una cuestión jurídica quedó demostrada la omisión culpable del ente fiscal, toda vez que hubiese sido menos perjudicial para el organismo rechazar la solicitud efectuada por la actora, evitando entrar en una zona de aparente incumplimiento de la que sólo pudo salir 6 años después, pagando sumas de dinero de imposible cancelación.

En este sentido, destacó que la actividad que desarrolla la cooperativa es la revisión de vehículos de transporte público de pasajeros, y que su tarifa sólo fue actualizada mínimamente en 2008 y 2009, encontrándose desfasada; lo que la hace incapaz en la práctica de soportar un reclamo retroactivo de esta envergadura. Señaló, asimismo, que la suma de dinero que se le reclama jamás fue cobrada a los usuarios, por lo que se trataría de un despojo de grandes proporciones.

Entendió que la buena fe imponía que el ente fiscal rechace la solicitud de exención en un tiempo prudencial, pues interpretó el silencio de la Administración como un verdadero acto convalidatorio de la exención solicitada, dado que la activa omisión por parte del fisco, la llevó a considerar que el estatus fiscal informado era correcto. En este sentido, sostuvo que el accionar fiscal resulta contrario a la teoría de los actos propios.

Subsidiariamente, adujo que el modo de cálculo del débito fiscal es erróneo, puesto que el fisco aplicó la alícuota del 21% al total de ingresos informados en cada uno de los períodos mensuales, cuando correspondía -a su entender- considerar que el IVA está necesariamente contenido en el monto facturado.

Consideró improcedentes los intereses resarcitorios calculados, por no encontrarse presente el aspecto subjetivo requerido. A su vez, interpretó que en autos se verifica un caso de *error excusable* que excluye su culpabilidad, en tanto las normas aplicables resultaron susceptibles de diferentes interpretaciones por parte de los organismos jurisdiccionales.

Esta existencia de error excusable excluye también -a su criterio- la posibilidad de aplicar multa alguna en los términos del art. 45 de la ley 11.683. En este sentido, destacó que en la causa “Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barranquero Ltda.”, la CSJN dejó sin efecto la multa impuesta por entender que existía un error que eliminaba la culpabilidad de la entidad.

Citó jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y petitionó que se revoque la resolución apelada.

III. Que a fs. 48/56vta. el fisco contestó el traslado del recurso, puso a disposición los antecedentes administrativos de la causa (en adelante aa) y solicitó que oportunamente se confirme la resolución apelada, con costas.

IV. Que a fs. 77 se abrió la causa a prueba. A fs. 112 y 128 se dictó una medida para mejor proveer a los fines de que el fisco acompañe las constancias de autorización de impresión de comprobantes emitidas al contribuyente durante los períodos 2004 a 2010 y para que informe si durante 08/2004 a 05/2020 se autorizó al contribuyente a emitir facturas tipo “C” u otro tipo de comprobantes y cuáles fueron efectivamente emitidos, lo que fue contestado a fs. 115/125 y 130/132.

A fs. 133 se clausuró el período de instrucción en la presente causa y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 140 se pusieron los autos para alegar, obrando el alegato del fisco a fs. 149/152, no habiendo hecho uso de ese derecho la actora. Finalmente, a fs. 154 se pusieron autos para dictar sentencia.

V. Que primeramente debo señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes, sino solo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros), ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).

VI. Que dicho ello, procede analizar la cuestión de fondo, consistente en determinar si los servicios prestados por la cooperativa se encuentran alcanzados por el IVA y en caso de estarlo, cuál es la base imponible del gravamen en los períodos fiscales cuestionados.

Del informe final de inspección (en adelante IFI) como así también de la resolución apelada, surge que la actora se encuentra inscripta en “Revisión técnica obligatoria de los vehículos afectados al transporte de pasajeros y de cargas”, y que cierra su ejercicio comercial al 31/07 de cada año (v. fs. 294/297, cpo. IVA, aa).

La fiscalización se originó a fin de analizar si la actividad desarrollada por la recurrente se encuentra alcanzada por el IVA.

A requerimiento de la inspección, la recurrente aportó los EE.CC. de los ejercicios 2004 a 2010 y el detalle de los ingresos en forma mensual. Luego, el asesor de la empresa aportó copia de los EE.CC. de la cooperativa y fotocopia del formulario 206/I del 20/08/2004, por el cual solicitó la exención en el impuesto (v. fs. 7, 21, 22/23 y 24/156vta., cpo. IVA, aa).

Se verificó que la recurrente suscribió un contrato de concesión de servicios con el Gobierno de la Pcia. de Mendoza, según Dto. 132 del 27/01/1997, emanado del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la Pcia. de Mendoza, mediante el cual obtuvo la concesión de las funciones de revisión técnica obligatoria de la totalidad de los vehículos afectados al transporte de pasajeros y de cargas (v. fs. 14/20, cpo. IVA, aa).

Luego de analizar la documentación aportada, la fiscalización actuante entendió que la actividad desarrollada por la recurrente se encontraba gravada en el IVA (cfme. art. 3, inc. “e”, ap. 21, LIVA).

Asimismo, citaron el fallo “Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda.”, del 16/02/2010, en el que la CSJN sostuvo que el precio que cobran las cooperativas por los trabajos contratados por ella con terceros, resulta alcanzado por el IVA, no correspondiendo la exención prevista por el art. 7, inc. “h”, ap. 19 de la ley del gravamen.

En base a ello, el fisco concluyó que la cooperativa no debió gozar del beneficio de exención en el IVA por los servicios que prestó a terceros con motivo de la concesión otorgada por el Gobierno de la Pcia. de Mendoza.

También señalaron los inspectores que al analizar las exenciones a la luz del art. 7, inc. “h”, pto. 23 de la LIVA y el art. 39 de su Dto. Reg. 692/1998, el beneficio establecido alcanza al precio que cobra el concedente por una concesión, cualquiera sea la forma y unidad de medida elegida para la retribución, pero no contempla los ingresos que pueda obtener el concesionario por la actividad que desarrolle.

Ello así, el fisco gravó con IVA la totalidad de los ingresos obtenidos en forma mensual por la actora, desde 12/2004 hasta 06/2010. A tal fin, la fiscalización tomó como base para la determinación, los ingresos

mensuales informados por la recurrente, que coinciden con los ingresos totales imputados en cada uno de los estados de resultados correspondientes a los años 2004 a 05/2010.

VII. Que el art. 3, inc. “e”, pto. 21, de la LIVA (siempre texto vigente al momento de los hechos) grava en forma genérica a las locaciones y prestaciones de servicios, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso. Asimismo, el art. 7, inc. “h” establece las exenciones atinentes, refiriéndose sus ptos. 18 y 19 a las cooperativas. En lo que al caso concierne, el pto. 19 exime del pago del tributo a *“...los servicios personales prestados por sus socios a las cooperativas de trabajo”*.

En este sentido, debo recordar que en materia de exenciones es clara la doctrina de la Corte en cuanto a que éstas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que la establezcan; y fuera de esos casos, corresponde una interpretación estricta de las cláusulas respectivas (Fallos: 319:1311 y 1855; 321:1660).

Al respecto, resulta válido mencionar que en las cooperativas de trabajo -a diferencia de las empresas- sus integrantes resultan ser quienes aportan su trabajo y a la vez son titulares de la misma. Así, tras restar de los ingresos sus costos e impuestos, las cooperativas obtendrán sus rentas netas, que no se encontrarán disminuidas por el beneficio empresario. Periódicamente, los trabajadores reciben por su trabajo lo que se conoce como “anticipo de retorno” a cuenta de los resultados finales.

En este punto, debemos diferenciar dos cuestiones: por un lado, la relación del asociado con la cooperativa, que el legislador quiso eximir del IVA, por tener un carácter alimentario idéntico al salario que perciben los trabajadores; y, por el otro, los servicios prestados por la cooperativa a sus clientes, los que adelanto, se encuentran alcanzados por el impuesto.

Así, comparto el criterio sostenido por la CSJN en el precedente ya citado de Fallos 333:16 “Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda.”, del 16/02/2010, que al adherir al dictamen de la Procuradora Fiscal sostuvo, respecto del pto. 19 del inc. “h” del art. 7 de la LIVA, que: *“...contrariamente a lo pretendido por la actora, de la letra de la ley no se sigue que la exención pueda comprender los servicios que las cooperativas presten a terceros, sea por medio de sus asociados o de otra forma.*

Además, la exención de que se trata no es una disposición caprichosa del legislador, sino que tiene sentido dentro del régimen del gravamen y del resto de las normas del sistema tributario, para evitar una inconsistencia en la mecánica de la gabela, además de resultar respetuosa de sus principios de generalidad y neutralidad.

En efecto, los socios de las cooperativas de trabajo ponen a disposición de esos entes sus servicios personales, los que, a su vez, son ofrecidos y concretados por éstos en el mercado. Así, se libera del pago del gravamen a los asociados ante una situación donde, al no poderse hablar de “relación de dependencia” en sentido estricto entre ellos y la cooperativa, se podría caer en el otro extremo, esto es, considerar que al no existir tal vinculación, habría obligación por parte del prestador del servicio (asociado) de añadir el gravamen en el precio (“retorno cooperativo”) de su labor, situación que lo colocaría en clara desventaja ante una situación que, de hecho, y como se dijo, resulta de similar especie a la relación laboral.

Es decir que tanto por la letra de la ley, como por su finalidad, puede colegirse, a mi modo de ver, que la vinculación que efectivamente liga a la cooperativa con los terceros no queda amparada en la eximición...(“...).

De igual modo, cabe poner de resalto que la cooperativa estará gravada como lo están los demás sujetos pasivos del gravamen (incluidas otras cooperativas que no sean exclusivamente de trabajo), y como lo están las empresas que se dedican, comercialmente y con carácter lucrativo, a proveer mano de obra a terceros. La diferencia, en este último caso, estará dada por el tratamiento que se les dé respecto de otros gravámenes, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, si es que el legislador estima conveniente hacer un distingo entre ellos, en atención a la diversa naturaleza del objeto respectivamente perseguido.”

Dicho esto, en cuanto a las pruebas testimoniales producidas a fs. 101/103, surge que una empleada de la actora, su contador, y la presidenta del Consejo, manifestaron que “...la cooperativa debía ser IVA exento porque habían salido unos fallos de similares condiciones a las que tenía...” y que el contador recomendó hacer las presentaciones correspondientes en la AFIP para solicitar la exención “...porque habían muchas posibilidades de que fuera así”; cabe destacar que se tratan de meras opiniones de los testigos que no aportan demasiado para el análisis de la cuestión técnica de fondo, y si en cambio respecto de la conducta llevada a cabo por la apelante.

Ello así, concluyo que los servicios prestados por la cooperativa de trabajo actora a terceros se encontraban alcanzados por el IVA, durante los períodos cuestionados.

VIII. Que resuelto ello, corresponde ahora que me expida respecto del agravio en subsidio expuesto por la actora, relativo al modo de cálculo del “débito fiscal” efectuado por el fisco, que los considera erróneo por haber aplicado la alícuota del 21% al total de los ingresos que surgen de sus EE.CC., cuando –a su criterio- debió considerarse que el tributo se encuentra contenido en el monto facturado.

A los fines de tratar este agravio, debe considerarse lo informado a fs. 115/125 y 130/132 por el fisco como resultado de la medida para mejor proveer ordenada a fs. 112 y 128. El ente fiscal informó que durante los períodos fiscales ajustados, el contribuyente no contó con autorización para emitir comprobantes “A” o “B” y que para la emisión de facturas “C” no resultaba necesario solicitar CAI (código de autorización de impresión). De tal manera, infiero que como los sujetos exentos del gravamen deben emitir comprobantes tipo “C” y la actora se consideraba “sujeto exento”, debió haber emitido este tipo de comprobantes, tal como lo anuncia a fs. 341 del Cpo. 2 de IVA de los aa. Máxime cuando de los informes de auditoría que surgen de los EE.CC. de la actora obrantes en los aa, se desprende que para compulsar los ingresos se tuvieron en cuenta recibos, boletas, comprobantes de pago, etc.

Por ello, reconociéndose la propia actora como un sujeto que facturó los servicios bajo la condición de “exento” -v. fs. 341, citada-, mal puede ahora aducir que el IVA estaba incluido en el importe declarado como ingresos en sus EECC -base del ajuste-, sin acreditarlo en debida forma.

En esta línea, cabe recordar que el fundamento de la doctrina de los actos propios reside en que el mismo ordenamiento jurídico es el que no tolera que un sujeto pretenda ejercer un derecho en abierta contradicción con una conducta suya previa, en otras palabras, nadie puede alegar un derecho que esté en pugna con su propio actuar anterior. Este principio, en el campo del derecho tributario, ha sido implícito, pero inequívocamente aplicado por la jurisprudencia de la Corte (Fallos: 274:96, considerando 5°, entre muchos otros).

En este sentido, resulta obvio que un sujeto exento -a diferencia del responsable inscripto- no genera “débito fiscal” por sus ventas o servicios; justamente, por su condición particular frente al gravamen. Por ello, en las facturas que emite -comprobantes tipo “C”- no surge discriminado el IVA porque, lisa y

llanamente, no existe tal gravamen. Por el contrario, cuando un responsable inscripto realiza ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas, se genera el “débito fiscal”, el cual se encontrará discriminado o no en la factura, dependiendo de la condición del sujeto adquirente frente al gravamen.

Ello así, corresponde confirmar el modo de cálculo del débito fiscal y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, con costas.

IX. Que en lo que respecta a los intereses resarcitorios intimados, cabe señalar que constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora imputable en la que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.

Al respecto, la CSJN ha revisado la doctrina de Fallos 304:203 donde expuso que: *“si bien en el precedente de Fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario...que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta de la contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido, en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión, no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello, es así, máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes...se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas”* (Fallos 323:1315).

Ahora bien, en el caso muy particular de autos, considero relevante observar detenidamente los hechos que rodearon el ajuste discutido.

El 20/08/2004 la cooperativa actora hizo una presentación ante el fisco –mediante multinota- en el que solicitó la exención a partir del 1/8/2004. A la fecha de tal presentación, ya se había dictado la sentencia de este Tribunal en la causa “Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Limitada”, el 17/06/2003, mediante la cual la Sala “A” revocó el ajuste practicado por el fisco –análogo al de autos-, considerando “exenta” del IVA las prestaciones efectuadas por dicha cooperativa. Tal circunstancia avalaba el criterio sostenido por la actora en su presentación.

Observo que en tal decisorio el Tribunal se remitió a su precedente “Cooperativa Cooperando de Trabajo Ltda.”, de fecha 16/04/1998 (vide considerando V), en el que el fisco ya había planteado la existencia en estos casos de dos hechos imponibles con distinto tratamiento tributario: uno representado por los servicios de los asociados a la cooperativa, exento; y otro representado por los servicios de la cooperativa a los terceros, gravado. Es decir que el fisco nacional mucho antes de la determinación de oficio aquí apelada, de fecha 6/10/2011, ya sostenía la postura allí expuesta; pero, sin embargo, y aún con precedentes a su favor (hacía más de un año, de la Corte en “Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda.”, del 16/02/2010; y de la Alzada de muchísimo antes, Sala III, “Cooperativa Cooperando de Trabajo Ltda.”, del 01/02/1999; Sala V, “Cooperativa de Trabajo Agrícola C. B. Ltda.”, del 7/11/2005), no rechazó ni observó

la inscripción como exenta, ni impugnó las DDJJ presentadas por la actora hasta “siete años después”. Si bien podría achacársele a la actora el desconocimiento -al momento de su presentación del 20/08/2004- del precedente de la Alzada ya citado “*Cooperativa Cooperando de Trabajo Ltda.*”, del 01/02/1999, lo cierto es que un diligente obrar de la administración fiscal, necesariamente esperable, debió conducir a un rechazo u observación o impugnación de las DDJJ de la actora, mucho antes del efectuado en la fiscalización base de la determinación aquí apelada. Es que, no puede achacársele a la actora haber adoptado la postura fiscal más favorable ante la existencia de sentencias contradictorias; en cambio, si considero que merece reproche la conducta del fisco, quien dilató injustificadamente la definición de la situación fiscal de la actora frente al IVA, sometiéndola a una innecesaria incertidumbre que luego impactó en forma directa sobre la facturación de 7 años.

Las circunstancias reseñadas, aun restrictivamente interpretadas, tal como lo manda la Corte en el precedente cuyos párrafos pertinentes fueron supratranscriptos, me llevan a considerarlas de una excepcionalidad tal que desplazan la responsabilidad de la mora necesaria para la confirmación de los intereses resarcitorios liquidados en autos; valoración que corresponde efectuar a este Tribunal (Fallos 304:203 considerando 9º) y que, en el caso de autos resultan muy particulares.

Por lo expuesto, corresponde dejar sin efectos los intereses resarcitorios liquidados e intimados en la resolución apelada, costas por su orden.

X. Que con relación a la multa impuesta, el art. 45 de la ley 11.683, vigente al momento de los hechos, en su parte pertinente disponía que: “*el que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionada con una multa graduada entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar ... siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable...*”, es decir, que el aspecto material de la infracción requiere de un resultado disvalioso, esto es, la omisión del pago, mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas.

Lo expuesto en los Considerandos precedentes evidencia que se configuró el elemento *objetivo o material* de la sanción aplicada.

Con relación al aspecto *subjetivo*, la CSJN tiene dicho que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 271:297, 303:1548, 312:149, entre tantos otros). Si bien es inadmisibles la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona realizó una conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos 316:1313, 320:2271).

Al respecto, debe señalarse que el Máximo Tribunal admitió al error excusable como eximente de responsabilidad cuando éste resulta de los extremos fácticos del caso, cuya valoración corresponde exclusivamente a los jueces de la causa (Fallos 292:195; 327:5345, entre otros), instituto receptado por el actual art. 50.2 de la ley 11.683 (texto según ley 27.430, BO 29/12/2017).

Ello así, corresponde una vez más recordar que la actora solicitó la exención el 20/08/2004 (v. fs. 21, aa), y no se la objetó sino hasta la fiscalización que originó los ajustes aquí apelados. En este sentido, y tal como ya lo señalé, durante los 7 años que demoró el fisco en impugnar las DDJJ en las que la cooperativa

declaraba como “exenta” su prestación de servicios, existieron disímiles interpretaciones jurídicas, con diferentes criterios jurisprudenciales; arribándose recién a conclusiones definitivas con el fallo dictado por la CSJN el 16/02/2010, en autos “Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda.”.

En consecuencia, entiendo que la demora del fisco en impugnar la condición de exenta de la cooperativa actora y la ambigüedad jurisprudencial existente, pudieron razonablemente llevar a la actora al convencimiento de que la eximición le correspondía, circunstancia que permite tener por configurado el “error excusable” eximente de responsabilidad penal infraccional que contempla el art. 45 de la ley 11.683, por lo que corresponde revocar la sanción impuesta, costas por su orden.

La Dra. Marmillon dijo:

Que adhiere al voto del Vocal preopinante.

Por ello, SE RESUELVE:

- 1) Confirmar el ajuste fiscal, con costas.
- 2) Revocar los intereses resarcitorios y la multa impuesta, con costas por su orden.

Se deja constancia que suscriben este pronunciamiento dos Vocales Titulares de la Sala C, conforme a lo previsto por el artículo 184, 4° párrafo de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.

Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.